S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 24
O R D I N A R I A
MARTES 11 DE MARZO DE 2025

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del martes once de marzo de dos mil veinticinco, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para celebrar sesión pública ordinaria las señoras Ministras y los señores Ministros Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Lenia Batres Guadarrama, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número veintitrés ordinaria, celebrada el lunes diez de marzo del año en curso.

Por unanimidad de diez votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del once de marzo de dos mil veinticinco:

I. 11/2023

Declaratoria general de inconstitucionalidad 11/2023, solicitada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil y 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En el proyecto formulado por el señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se propuso: *“ÚNICO. La presente declaratoria general de inconstitucionalidad ha quedado sin materia”*.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la propuesta de los apartados del I al IV relativos, respectivamente, a la competencia, a la legitimación, a la procedencia y a los antecedentes, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

El señor Ministro ponente González Alcántara Carrancá presentó el apartado V, relativo al estudio.

Precisó que la presente declaratoria de inconstitucionalidad deriva del amparo en revisión 356/2020, en el que la Primera Sala determinó que los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil, así como 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, resultaban inconstitucionales al enumerar los derechos de las personas

con discapacidad, especialmente a la igualdad y no discriminación, al reconocimiento de su capacidad jurídica y a la autodeterminación, al considerar que la regulación del estado de interdicción no resulta acorde con la premisa de la dignidad humana como principio y fin prioritario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente al imponer una tutela para que dichas personas ejerzan sus derechos como un sistema sustitutivo de su voluntad para adoptar sus propias decisiones, lo que resulta contrario al modelo social de discapacidad, además de que las citadas reglas procesales llevan implícito el prejuicio o estereotipo asociados a la discapacidad del tipo intelectual, mental o psicosocial.

El proyecto propone determinar que el presente asunto ha quedado sin materia. Por lo que hace a los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil local, en razón de que, actualmente, dichos preceptos ya fueron modificados por el Congreso de la Ciudad de México mediante el decreto publicado el veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, eliminando el estado de interdicción y la incapacidad jurídica por motivos de discapacidad, de tal forma que el problema de inconstitucionalidad advertido por la Primera Sala ha sido superado.

En cuanto a los preceptos 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal porque se derogaron con la entrada en vigor del Código

Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, conforme a su artículo transitorio décimo noveno.

La señora Ministra Ortiz Ahlf se manifestó parcialmente a favor de la propuesta, pues si bien compartió dejar sin materia este asunto respecto de los artículos del Código Civil para el Distrito Federal, discordó de ello en cuanto a los artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Explicó que, si bien mediante la emisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo artículo transitorio décimo noveno estableció que se derogaban todas aquellas disposiciones que establecieran procedimientos de interdicción, también se especifica que ello se efectuará de conformidad con las demás disposiciones transitorias, siendo que el diverso artículo transitorio segundo establece que este ordenamiento entrará en vigor gradualmente, de conformidad con la declaratoria que, al efecto, emitan los Congresos locales, al igual que el diverso transitorio tercero prevé que las legislaciones procesales civiles de los Estados se abrogarían conforme al mencionado artículo transitorio segundo.

En ese contexto, el veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro el Congreso de la Ciudad de México emitió un acuerdo por el que se emite la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, en cuyo artículo primero, inciso e), fracción II, establece que, a partir del primero de junio de dos

mil veinticinco, serán vigentes sus disposiciones tratándose de cualquier procedimiento y controversia tramitada por jurisdicción voluntaria, providencia precautoria, ejecutivo civil oral, así como los procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa, y que, a partir del quince de noviembre siguiente, entrará en vigor lo relativo a las controversias tramitadas en la vía ordinaria civil, entre otros. Por su parte, el artículo segundo de dicho acuerdo especifica que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se abroga en las fechas y respecto de los asuntos antes señalados. En ese sentido, los artículos 902, en la parte referente a la declaración de incapacidad, 904 y 905, que prevén el procedimiento de interdicción en el que se desarrollan diversas diligencias prejudiciales y un juicio ordinario en caso de desacuerdo, a la fecha de resolución del presente asunto, continúan vigentes y, por lo tanto, al no haber sido modificados o derogados, el problema de la inconstitucionalidad o inconvencionalidad detectado por la Primera Sala subsiste, lo que justifica que éstos sean expulsados del ordenamiento jurídico de la Ciudad de México.

Agregó que el procedimiento para decretar el estado de interdicción que continúa vigente resulta contrario al artículo 1º constitucional y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, toda vez que vulnera la dignidad humana y el reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, pues limita su libre

autodeterminación, ya que parte de prejuicios y promueve estereotipos.

El señor Ministro Pérez Dayán coincidió con la señora Ministra Ortiz Ahlf en estar de acuerdo con el proyecto respecto de las normas del Código Civil para el entonces Distrito Federal, pero no así con los artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Indicó que, si bien el decreto de tres de julio de dos mil veinticuatro, expedido por el Congreso de la Ciudad de México, realizó la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se requiere una declaratoria de inconstitucionalidad en términos de lo resuelto por la Primera Sala, en tanto que esas disposiciones adjetivas siguen vigentes, pues dicha declaratoria entrará en vigor hasta el uno de junio de dos mil veinticinco.

Observó que el párrafo 36 del proyecto explica el contenido del artículo transitorio segundo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la declaratoria de vigencia hecha por el Congreso de la Ciudad de México, pero no implica la interpretación más favorable a las personas con discapacidad mayores de dieciocho años, aunque ello podría discutirse en el fondo, pero no así considerar sin materia esta declaratoria general de inconstitucionalidad respecto de los artículos adjetivos.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández se separó de los párrafos 23 y 27, relacionados con el cómputo

del plazo que establece el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución, como ha votado en repetidas ocasiones. Anunció un voto concurrente en cuanto a la declaración sin materia respecto de los preceptos del Código de Procedimientos Civiles aplicable para la Ciudad de México a partir de la entrada en vigor del Decreto que expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con razones adicionales.

El señor Ministro Pardo Rebolledo concordó con los argumentos expuestos para estar a favor del proyecto en relación con los artículos del Código Civil, pero no así con los del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la propuesta del apartado V, relativo al estudio, consistente en determinar que el presente asunto ha quedado sin materia, respecto de la cual se obtuvieron los resultados siguientes:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández separándose de los párrafos 23 y 27 en cuanto al cómputo del plazo, la propuesta consistente en considerar sin materia esta declaratoria general de inconstitucionalidad respecto de los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil del

entonces Distrito Federal. La señora Ministra Ríos Farjat anunció voto concurrente.

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidenta Piña Hernández separándose de los párrafos 23 y 27 en cuanto al cómputo del plazo, la propuesta consistente en considerar sin materia esta declaratoria general de inconstitucionalidad respecto de los artículos 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles del entonces Distrito Federal. La señora Ministra Ortiz Ahlf y los señores Ministros Pardo Rebolledo y Pérez Dayán votaron en contra. Las señoras Ministras Ríos Farjat y Presidenta Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes.

Previo requerimiento de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, el secretario general de acuerdos precisó que no hubo cambios en el punto resolutivo que regirá el presente asunto.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la congruencia formal del punto resolutivo, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta del asunto siguiente de la lista oficial:

II. 153/2023

Acción de inconstitucionalidad 153/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí y la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí, reformadas y derogadas mediante los DECRETOS 0768 y 0769, publicados en el periódico oficial de dicha entidad federativa el siete de junio de dos mil veintitrés. En el proyecto formulado por el señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se propuso: *“PRIMERO. Es procedente, pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los DECRETOS 0768, por el que se deroga del Título Primero el Capítulo IV ‘De la familia de los usuarios’ y el artículo 4° Bis de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y 0769, por el que se reforma el artículo 40 en su fracción I, y deroga del artículo 11 la fracción XVIII de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el siete de junio de dos mil veintitrés. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”*.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la propuesta de los apartados del I al V relativos, respectivamente, a la competencia, a la precisión de las normas reclamadas, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia y sobreseimiento, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

El señor Ministro ponente González Alcántara Carrancá presentó el apartado VI, relativo al estudio de fondo. El proyecto propone reconocer la validez de los DECRETOS 0768, por el que se deroga del Título Primero el Capítulo IV 'De la familia de los usuarios' y el artículo 4° Bis de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y 0769, por el que se reforma el artículo 40 en su fracción I, y deroga del artículo 11 la fracción XVIII de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el siete de junio de dos mil veintitrés.

Señaló que, en el primer subapartado, se retoman diversos precedentes de este Tribunal Pleno, a partir de los cuales se ha construido el parámetro de regularidad de las consultas a personas con discapacidad, particularmente con los elementos mínimos para tenerla por satisfecha.

Indicó que, en el segundo subapartado, se analiza el proceso de consulta llevado a cabo por el Congreso local. De las constancias aportadas se desprende que cumplió los requisitos de ser previa, pública, abierta y regular, pues se garantizó la participación de las personas con discapacidad en el Estado previo a una convocatoria, en la que se establecieron, puntualmente, los temas a consulta y las modalidades, recintos y horarios en que se llevarían a cabo, incluso se estableció una reunión previa a la formulación de los dictámenes legislativos.

Por otro lado, se advierte que todo el proceso fue accesible, empezando por la convocatoria, ya que se hizo en formato tradicional, de lectura fácil, en braille, en lectura fácil transcrita al braille, en audio y en vídeo con lengua de señas, y fue ampliamente difundida por los medios de publicidad digital, carteles, trípticos y un minisitio para la consulta. En la etapa de consulta, para recabar las opiniones de las personas con discapacidad se dispusieron diversas modalidades, como la recepción de escritos de forma física en distintas sedes, por medios digitales y presenciales en los foros regionales, y se contó con asistencia en lenguas de señas y en materiales braille, en un lenguaje sencillo y en pictogramas. La accesibilidad también se observó en la fase legislativa de su dictaminación, pues antes de la sesión de las comisiones se llevó a cabo una reunión presencial y virtual con personas con discapacidad con asistencia de un intérprete de lenguas de señas, previa a la difusión del informe de los resultados y de los dictámenes en braille y en

lengua de señas. Posteriormente, en la sesión del Pleno se contó con un intérprete de lengua de señas.

La consulta cumplió, además, con el requisito de ser informada, pues la convocatoria se desarrolló de manera detallada y precisa, señalando las modalidades, los temas a tratar, los días y horas y sedes en que participarían las personas con discapacidad. Asimismo, en los foros regionales por medio de personal capacitado, se informó a las personas con discapacidad sobre sus derechos, los motivos de la consulta, los temas a consultar y sus consecuencias.

Por otro lado, la consulta también resultó significativa, pues contó con participación efectiva porque los formatos utilizados por el Congreso permitieron que tuviera un carácter abierto, por lo que las personas con discapacidad podían fijar su postura sobre los temas en la consulta y sobre cualquier otro de su interés. Además, en los foros regionales se propició el diálogo, habiendo participación oral y por escrito de algunos de los asistentes. Aunado a ello, el Congreso realizó un análisis de los resultados de la consulta, así como de diversos precedentes de este Alto Tribunal y emitió las medidas legislativas impugnadas.

Finalmente, se considera que la consulta cumplió los elementos de ser estrecha, con participación directa de las personas con discapacidad y también de ser transparente, pues las personas con discapacidad de todas las edades participaron directamente y contaron con asistencia.

Además, la documentación generada por el órgano parlamentario fue ampliamente difundida.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la propuesta del apartado VI, relativo al estudio de fondo, consistente en reconocer la validez de los DECRETOS 0768, por el que se deroga del Título Primero el Capítulo IV ‘De la familia de los usuarios’ y el artículo 4° Bis de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y 0769, por el que se reforma el artículo 40 en su fracción I, y deroga del artículo 11 la fracción XVIII de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el siete de junio de dos mil veintitrés, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

Previo requerimiento de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, el secretario general de acuerdos precisó que no hubo cambios en los puntos resolutiveos que regirán el presente asunto.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutiveos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Acto continuo, levantó la sesión a las doce horas con veinte minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima sesión ordinaria, que se celebrará el jueves trece de marzo del año en curso a la hora de costumbre.

Firman esta acta la señora Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	NORMA LUCIA PIÑA HERNANDEZ	Estado del certificado	OK	Vigente	
	CURP	PIHN600729MDFXRR04				
Firma	Serie del certificado del firmante	636a6673636a6e000000000000000000000002d5	Revocación	OK	No revocado	
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	31/03/2025T20:38:10Z / 31/03/2025T14:38:10-06:00	Estatus firma	OK	Valida	
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION				
	Cadena de firma	68 b0 c7 ac 45 01 c6 0b 04 3c e8 b2 9c 14 9e 8f c4 05 a0 a1 10 a3 de 6c 1c 5c 69 d5 98 43 8d ed 87 ba e8 99 cd fd 3f a9 5d b3 f5 3a 5b 01 de 48 44 b3 10 23 9d 64 ce ee 95 ee 0f c6 a3 5f c8 3b db 61 ea 0e 5f 43 11 6e 24 83 e7 a5 d8 13 f3 ce b8 ef 41 7c 46 6d d5 af 37 bc f9 94 72 74 09 69 78 60 44 d3 91 e6 af 5e e7 6f 66 80 e0 32 81 1d 51 a4 ca f1 7d 49 a5 bb bd 19 7d 83 21 0b e3 06 2a 5c 1c 78 f7 f0 83 ef 1b 71 b7 70 5e 3d 97 c1 92 84 78 26 f0 db 5e 04 08 8b 99 8e 4b ea 46 d3 86 cc 83 ba 64 91 c6 16 ba ab a4 4d 54 80 66 4c c0 ea c8 18 e3 f4 ee 26 fd 63 f7 4f 2c b6 83 9f 20 00 60 d9 83 0e 69 ea 4b 6a 10 1b 19 e1 83 08 0e 95 f4 44 64 bd d7 37 89 ca 25 2f 34 a6 3c 1f 3b db 3c f5 c3 7e 16 84 58 53 e7 e7 40 58 06 2b 80 24 20 1a 73 84 6b 02 3d ec db f8 36 dc 23 38				
	Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	31/03/2025T20:38:10Z / 31/03/2025T14:38:10-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Número de serie del certificado OCSP	636a6673636a6e000000000000000000000002d5				
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	31/03/2025T20:38:10Z / 31/03/2025T14:38:10-06:00				
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL				
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Identificador de la secuencia	8469327				
	Datos estampillados	3B05EF118CB465728326686CBDD597DC1682DCC9387FB8F56AAF599231AD0F26				

Firmante	Nombre	RAFAEL COELLO CETINA	Estado del certificado	OK	Vigente	
	CURP	COCR700805HDFLTF09				
Firma	Serie del certificado del firmante	636a6673636a6e0000000000000000000000017d	Revocación	OK	No revocado	
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	26/03/2025T20:13:19Z / 26/03/2025T14:13:19-06:00	Estatus firma	OK	Valida	
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION				
	Cadena de firma	79 f7 65 3f 38 a3 e8 fd db bb 30 71 c7 a7 54 ef 21 eb 59 47 e8 75 e5 51 b0 48 f0 ac 80 02 4d 75 56 3d c3 33 37 13 96 be 36 d3 18 f3 eb e0 6f 76 08 87 38 f4 0a 04 af 1a 5d f3 e5 7f 70 8d d6 62 a5 8b 38 7a ba 73 2a 01 f8 cb 26 12 73 d9 58 9b 70 a7 55 03 17 18 b9 fc 69 3e 41 fe 43 d4 4d 94 58 5d e1 cc f9 85 9b 5f aa 9d 84 49 87 c0 13 09 d1 3d ef 71 26 ef f9 46 85 a5 21 21 e9 ec 0c f6 4f 0c d6 02 36 23 4d 2c 04 a8 cd 72 17 07 40 e4 98 51 31 52 73 ba 3c d8 2a 5e d0 e0 0e 31 94 aa 6b ad b3 4c 48 23 40 c2 82 e2 21 d2 24 f3 55 cd 38 ee 54 a1 2c d6 29 44 88 35 3b 43 6c 71 23 57 bc 9b 25 dc 7d 36 39 0d e6 63 5e ca 6a bc c8 07 9d ba b0 77 22 45 2f ca 93 9e fe 9e fd dd 6b d2 3b d7 2f a4 4e 85 bd bd 11 4c ad df ea 77 be f6 a1 91 f0 da 62 1e 4d fe 21 1b 49 8b 18 bf 7d 23				
	Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	26/03/2025T20:13:19Z / 26/03/2025T14:13:19-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Número de serie del certificado OCSP	636a6673636a6e0000000000000000000000017d				
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	26/03/2025T20:13:19Z / 26/03/2025T14:13:19-06:00				
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL				
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Identificador de la secuencia	8369600				
	Datos estampillados	02C3833194BE1C46128767BCA52D3A407566A228E0DC4FA5E43D82F56D7B0383				